

C.A. de Santiago

Santiago, doce de julio de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

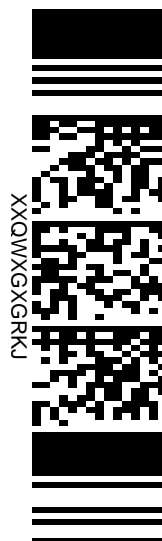
PRIMERO: Que **Florencia Winter Del Bosco** dedujo recurso de protección en contra del **Ministerio de Educación**, por su negativa a otorgarle la beca Vocación de Profesor, pese a cumplir con los requisitos para ello, lo que considera un acto ilegal y arbitrario que atenta en contra de las garantías establecidas en el artículo 19 N.º 1, 2 y 11 de la Constitución Política de la República.

Explica que ingresó a estudiar Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de Chile el año 2015, aunque siempre tuvo en mente estudiar el Programa de Formación Pedagógica para licenciados de un año, una vez terminada su carrera.

Indica que el 31 de diciembre de 2019 obtuvo la licenciatura en Ciencias de la Ingeniería y que, para obtener el título de Ingeniera Industrial Mecánica tomó 15 ramos, de tal modo que el primer semestre de 2021 fue el último por el que pagó arancel. Así, tras realizar su práctica, el 5 de mayo de 2022 fue aprobado su trabajo de título, obteniendo a contar de esa fecha el título de Ingeniera Civil de Industrias.

Sostiene que, a fines del año 2021, decidió postular al programa de Pedagogía Media para Licenciados de la Universidad de Los Andes, para estudiar a partir del año 2022. Señala que una vez inscrita en el programa decidió postular a la Beca Vocación de Profesor para poder cubrir el arancel de la carrera, lo que se concretó el 7 de marzo de 2022, estimado cumplir con todos los requisitos que señala el Decreto N° 97 del Ministerio de Educación que “Reglamenta el Programa de Becas de Educación Superior.” Sin embargo, el 17 de mayo de 2022 tomó conocimiento del rechazo de su postulación, fundado en un supuesto registro de doble matrícula en la Universidad de Los Andes y en la Pontificia Universidad Católica.

Refiere haber deducido recurso de reposición en contra de la resolución que rechazó su postulación, argumentando que la doble



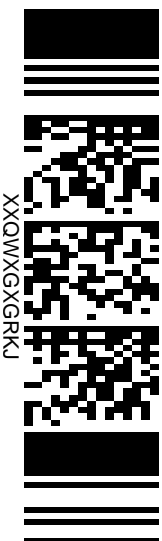
matrícula no era una causal legal para denegar la beca. Agrega que la otra carrera que estaba cursando, era Ingeniería Civil, una carrera que no es elegible para la Beca Vocación de Profesor, y respecto de la cual solo le restaba defender su tesis. Señala que el 20 de julio de 2022 se le informó el rechazo de su recurso, esta vez por un motivo diferente: no contar con licenciatura o título, lo que considera falso ya que estaba licenciada desde el 31 de diciembre de 2019 en Ciencias de la Ingeniería. En contra de esta resolución, dedujo recurso de apelación, argumentando tener la calidad de licenciada desde el 31 de diciembre de 2019 y que su título de Ingeniera Civil le fue otorgado el 5 de mayo de 2022, situación que, además, plasmó en una declaración jurada.

Explica que, en paralelo, el 5 de septiembre de 2022 ingresó un reclamo ante el Ministerio de Educación, reiterando lo ya señalado y acompañando el certificado de licenciada otorgado por la Pontificia Universidad Católica, debido a que no lo había acompañado en su apelación. Así, considera que, desde esa fecha, la Administración estaba en pleno conocimiento de su calidad de licenciada. Precisa que aquel reclamo fue respondido el 6 de septiembre, señalándosele que debía esperar a que se resolviera su apelación.

Alega que el 29 de septiembre de 2022 se anunciaron los resultados de la postulación, siendo rechazada nuevamente, ya que, según la información en poder del Ministerio de Educación, no contaba con un grado de licenciatura o título profesional.

Añade que, ante lo anterior, los días 29 de septiembre y 12 de octubre realizó dos reclamos en contra del Ministerio de Educación por el actuar ilegal y arbitrario de no haberle asignado la beca solicitada, los que, sin embargo, fueron nuevamente rechazados indicándole que su apelación había sido rechazada por no haber adjuntado fotocopia simple del título mencionado en la declaración. Finalmente, refiere que el 12 de octubre realizó un tercer reclamo, el que, hasta la fecha de interposición de su recurso no había sido respondido.

Considera que el acto es ilegal porque infringe el Decreto N° 97 que Reglamenta el Programa de Becas de Educación Superior, la ley



19.880 que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado y el artículo 54 de la Ley General de Educación. Asimismo, estima que el acto es arbitrario porque da cuenta de un proceder antojadizo de parte del Ministerio de Educación y vulnera el derecho a la igualdad, ya que el Ministerio de Educación se niega a reconocerle el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a la beca Vocación de Profesor, discriminándola en su calidad de Licenciada en Ciencias de la Ingeniería, a su vez, estima infringidas las garantías constitucionales a la libertad para elegir un establecimiento educacional y a su derecho a la integridad física y psíquica.

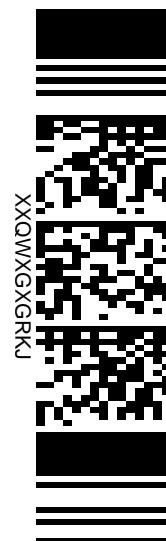
Por estas razones, y tras citar el estatuto normativo que considera aplicable a su acción constitucional y detallar la forma en que la conducta imputada a los recurridos vulnera las garantías constitucionales cuya protección persigue, solicita acoger su recurso de protección, arbitrando todas las medidas tendientes a restablecer el imperio del derecho quebrantado por las acciones ilegales y arbitrarias descritas en su libelo, con costas del recurso.

SEGUNDO: Que, por la recurrida, evacuó informe el jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría de Educación Superior, solicitando el rechazo de la acción constitucional deducida en su contra.

En primer lugar, plantea cuestiones de admisibilidad del recurso basándose principalmente en tres elementos: la naturaleza jurídica del recurso de protección, la preexistencia y la indubitabilidad del derecho invocado.

Al respecto, alega que el recurso de protección, según el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es entendido como una acción cautelar que protege contra actos u omisiones ilegales o arbitrarias que amenacen garantías constitucionales específicas. Sin embargo, en estos autos, el recurso impetrado no cumple con las características y parámetros de tal acción cautelar.

Luego, argumenta que la recurrente no tiene el pleno y legal ejercicio de los derechos que alega han sido violados, citando varios fallos de la Excelentísima Corte Suprema que respaldan esta



posición, reforzando el argumento de que la acción de protección solo ampara el ejercicio legítimo de derechos preexistentes.

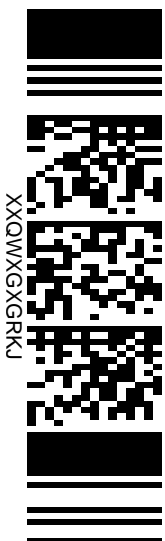
Finalmente, enfatiza en el concepto de "derecho indubitado", es decir, un derecho cuya existencia y titularidad son incuestionables. Según un fallo de la Excma. Corte Suprema de 2010 (Rol ingreso Corte N°1827-2010), si no se puede demostrar que un derecho indubitado ha sido amenazado o privado, el recurso de protección pierde su objeto.

Aplicando estos tres fundamentos al caso en cuestión, argumenta que la supuesta violación de derechos en el proceso de asignación de becas es infundada, ya que no existen títulos informados o reportados por cualquier Institución de Educación Superior que corroboren el derecho de la recurrente a una beca. Además, sostiene que la asignación de recursos por concepto de becas no constituye un derecho preexistente, sino una mera expectativa.

En cuanto al fondo del asunto, refiere que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley N° 20.129, el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, está encargado de desarrollar y mantener el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SIES). Este sistema recopila los antecedentes necesarios para la aplicación de políticas públicas y la gestión institucional en el ámbito de la educación superior. Las instituciones de educación superior están obligadas a proporcionar la información requerida por la Subsecretaría de Educación Superior.

En base a la información contenida en el SIES, se constata que la estudiante Florencia Winter no ha informado ningún título o licenciatura obtenida de ninguna institución de educación superior, ni existen registros actualizados de los títulos mencionados por la recurrente en su presentación.

Sostiene que, de acuerdo a la revisión de los registros y bases de datos de la Subsecretaría de Educación Superior, se encontró que la estudiante Florencia Winter postuló a beneficios estudiantiles a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS) para el año 2022. Sin embargo, no cumplía con el requisito de tener



un grado de licenciatura o título profesional, por lo que no fue favorecida con la asignación inicial de la Beca Vocación de Profesor.

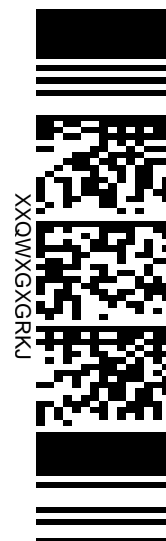
Refiere que, según la Ley de Presupuestos del Sector Público y el Decreto N° 97 de 2013, la Beca Vocación de Profesor está destinada a estudiantes que posean un grado de licenciado o título profesional y se matriculen en programas de formación pedagógica elegibles y que estos requisitos deben ser cumplidos para postular y obtener la beca, lo que no habría ocurrido en el caso de la recurrente, en función de la información que obra en su poder.

Por otra parte, argumenta que la publicación de resultados en la página web www.beneficiosestudiantiles.cl el 29 de septiembre de 2022 no constituye un acto administrativo terminal o decisorio, sino que es simplemente una comunicación informativa sobre la obtención o no de un beneficio, ya que los actos administrativos necesarios para la asignación definitiva de becas se realizan a través de Resoluciones Exentas y Decretos sujetos a toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.

Por lo tanto, estima que dicho servicio no ha incurrido en acto arbitrario y/o ilegal alguno que pueda afectar alguna de las garantías constitucionales de la recurrente, por lo que solicita el rechazo del recurso de protección deducido en su contra.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Consecuentemente, para la procedencia de la acción cautelar de protección es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera que la Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que



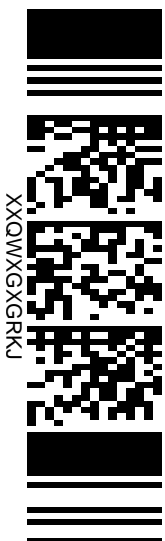
contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

CUARTO: Que a propósito del acto administrativo que atenta en contra de las garantías que invoca en el recurso de protección en favor la recurrente Florencia Winter Del Bosco, esto es, la publicación de resultados en la página www.beneficiosestudiantiles.cl, del día 29 de septiembre de 2022, donde es rechazada por: “1. Según la información en poder del Ministerio de Educación, no cuentas con un grado de licenciatura o un título profesional. Requisito establecido para este beneficio”, no es discutido lo relativo a las normas que rigen para otorgar la “Beca Vocación de Profesor”, determinadamente: “(...) la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2021, en su Partida 09, Capítulo 90, Programa 02, Subtítulo 24, Ítem 23, asignación 200, glosa 06. Consigna recursos para el Programa de Becas de Educación Superior, dentro de la cual en su Letra e) reconoce la Beca Vocación de Profesor”(…), normativa que, en lo atinente al recurso, establece:“(…) iii) 250 becas destinadas a quienes posean grado de licenciado a título profesional, cuando se matriculen en un programa de formación pedagógica elegible. Los requisitos de elegibilidad y demás condiciones se regirán por las normas dispuestas para la Beca Vocación de Profesor en el reglamento. Se deberán considerar prioritariamente en la asignación a quienes se encuentren ejerciendo actualmente la docencia en establecimientos educacionales que reciben financiamiento del Estado sin contar con el título de profesor (...)”.

Tampoco es controvertido que, la materia se rige por el Decreto N° 97, de 2013, del Ministerio de Educación que Reglamenta el Programa, determinadamente, la Beca Vocación de Profesor.

Precisamente, en este sentido el artículo 37, enseña que: “Podrán postular a la Beca Vocación de Profesor en los términos en que ha sido definida en el artículo 1° del presente reglamento:

(...) c) Los estudiantes que posean grado de licenciado o título profesional, que se matriculen en un programa de formación pedagógica elegible. Para postular a esta beca, los



estudiantes deberán cumplir los requisitos señalados en el artículo 44 bis del presente reglamento. (...).

Por consiguiente no es controvertido, además, que resulta atinente el artículo 44 bis, del citado reglamento, disposición que, en lo que al recurso interesa, es decir, atendida la causal del rechazo por parte del Ministerio de Educación de la Beca Vocación de Profesor a la recurrente “(...)poseas grado de licenciado o título profesional (...)”, ordena:

“(...) Respecto de los postulantes señalados en el literal c) del artículo 37 del presente instrumento, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

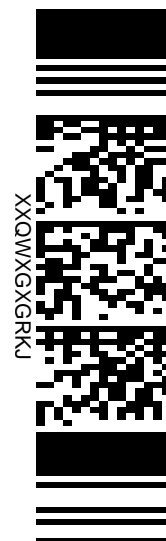
a) Tener grado de licenciado o título profesional otorgado por una institución de educación superior.

b) Matricularse en una universidad que se encuentre acreditada institucionalmente, por lo menos el nivel básico, de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.129, el 31 de diciembre del año anterior al proceso de asignación de becas respectivo, para estudiar Programas o ciclos de formación en pedagogía acreditados que dicha institución declare como elegibles en la oferta académica del respectivo Proceso de Admisión.(...)”.

QUINTO: Que, en armonía con lo anterior se debe tener presente que, la letra h) del artículo 2° del Decreto N° 352 de 2012, del Ministerio de Educación, que "Reglamenta el Sistema de Información de la Educación Superior", ordena que las Instituciones de Educación Superior entreguen o proporcionen a la Subsecretaría de Educación Superior la información de los Estudiantes que:

“i) Obtengan un título profesional o grado académico en carreras o programas impartidos por la Institución (...)”.

SEXTO: Que directamente vinculada a la obligación anterior cabe tener en cuenta que la Contraloría General de la República, en el Dictamen N° 43.643, de 2011, ha expresado que las personas actúan sobre la base del proceder regular de la Administración, en la confianza y en la expectativa que su situación se consolidará como en derecho corresponde, principio doctrinario que tiene



su fundamento en valores que emanan de la propia Constitución Política de la República.

SEPTIMO: Que, por ello, en relación con el antecedente académico que la parte recurrida echa de menos, en el caso de autos se ha comprobado, conforme al Certificado de Grado adjunto, que a la recurrente Florencia Andrea Winter Del Bosco, cédula de identidad 19.246.482- K, de acuerdo a la reglamentación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con fecha 31 de diciembre de 2019, según consta del expediente correspondiente, se le otorgó el grado de académica de Licenciada en Ciencias de la Ingeniería.

OCTAVO: Que, por consiguiente, considerando que la recurrente Florencia Andrea Winter Del Bosco, cumple con el requisito de Licenciada otorgada por una institución de educación superior que recibe el financiamiento institucional, corresponde que se le otorguen los estudios correspondientes a la Beca Vocación de Profesor para licenciados y profesionales, asignación que financia la matrícula y la totalidad del arancel anual del ciclo pedagógico, por cuanto, existiendo una norma general que reglamenta el sistema de información de la educación superior, no puede desconocer el Ministerio de Educación recurrido, ni aún a pretexto de que la Pontificia Universidad Católica no haya informado la situación educacional de la actora a la Subsecretaría de Educación Superior, desconocer el derecho de la Licenciada, porque en la especie tal calidad educacional superior, ya había originado derechos para la recurrente y, además, éstos habían ingresado a su patrimonio.

NOVENO: Que, en consecuencia, la actora Florencia Andrea Winter Del Bosco, al cumplir con los requisitos legales para que regularmente le haya sido concedida la Beca de Vocación de Profesor, y no obstante haber la autoridad desechado la postulación, desde luego, ha existido una discriminación arbitraria e ilegal en su contra, en la dimensión de la igualdad de trato con las demás postulantes al beneficio, y de esa forma, se infringe el derecho fundamental de igualdad ante la ley que, como garantía constitucional reconoce el numeral 2, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.



Asimismo, por las razones expresadas en el considerando anterior, por vía de ilegalidad y arbitrariedad, se infringe además la garantía del derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporeales, reconocido en el numeral 24, del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Y, vistos, además, lo dispuesto en el artículo 19, números 2 y 24, y artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la materia, se resuelve:

Que, **se acoge con costas** el recurso de protección interpuesto en favor de Florencia Andrea Winter Del Bosco en contra del Ministerio de Educación, el que deberá otorgar a la recurrente la Beca Vocación de Profesor dentro de diez días.

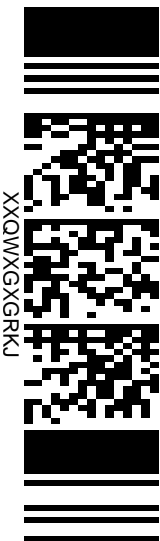
Redacción del Ministro Jorge Zepeda Arancibia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección 123519-2022 Protección.

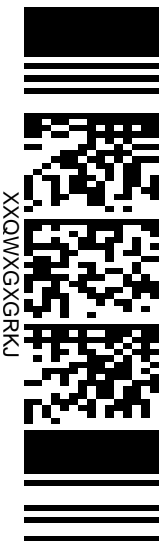
Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Jorge Luis Zepeda Arancibia, señor Tomás Gray Gariazzo y el Abogado Integrante señor Euclides Ortega Duclercq.

En Santiago, doce de julio de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.



Pronunciado por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Jorge Luis Zepeda A., Tomas Gray G. y Abogado Integrante Euclides Ortega D. Santiago, doce de julio de dos mil veintitrés.

En Santiago, a doce de julio de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>